



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

11806/2024

ASOCIACION DE BANCOS ARGENTINOS (ADEBA) Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA s/ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA

Quilmes, de marzo de 2025.- MSF

AUTOS Y VISTOS:

Este expediente N° FLP 11806/2024, caratulado: “ASOCIACION DE BANCOS ARGENTINOS (ADEBA) Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA s/ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA”, del Registro de la Secretaría Civil N° 6 de éste Juzgado Federal de Quilmes.

Y CONSIDERANDO QUE:

I) De conformidad con lo que surge de las constancias de autos, las presentes actuaciones fueron iniciadas por Andres Valls, Claudio Cesario, Hugo Bruzone, Diego García, Carmen Nosetti, Josue Antu Aguilar, Guillermo Pedró, Leonel Manevy, Carlos María Rotman y Carlos Alberto Carmen en representación de la Asociación de Bancos Argentinos, Asociación de Bancos de la Argentina, Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Comafi S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Banco Piano S.A., respectivamente, con el patrocinio letrado de los Dres. Liban Angel Kusa (T° 102 F° 761, C.F.A.S.M.) y Nicolás Nogueira Castellini (T° 136 F° 494, C.F.A.S.M.); contra la Municipalidad de Avellaneda.

La misma tiene como objeto que se declare la inconstitucionalidad del artículo 183 de la Ordenanza Fiscal para el ejercicio 2024, en virtud del cual se determinó que la base imponible de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene aplicable a las entidades financieras estará constituida por el total de la suma del haber de la cuenta de resultados sin que se admita deducciones de ningún tipo, alcanzando también a las normas que eventualmente reemplacen a las mencionadas en el párrafo precedente y que mantengan la confirmación de la base imponible de la TSH en los términos descriptos, en virtud de que dicha normativa violenta principios rectores de nuestra Constitución Nacional, normas



#38989035#447545635#20250314081124743

federales y la consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de las facultades tributarias de los distintos niveles de gobierno

Exponen que La Ordenanza Fiscal 2024 fue publicada en el Boletín Oficial Municipal del 15.12.2023 mediante Ordenanza N° 30.476. Dicha norma fue derogada y reemplazada por la Ordenanza N° 30.644 publicada en el Boletín Oficial del 29.04.2024.

Explican que el spread bancario es el margen de intermediación financiera por la actuación de banco en la captación y colocación del dinero. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva indica la rentabilidad bruta sobre los recursos intermediados y es un elemento central del normal desarrollo de la actividad bancaria. Cualquier regulación que altere su naturaleza o aplicación afecta al sistema bancario y a la actividad de intermediación financiera de los bancos. Con anterioridad a la sanción de la legislación cuestionada, el artículo 183 de la Ordenanza Fiscal de la Municipalidad disponía respecto a la base imponible de la TSH relativa a los bancos lo siguiente: "...Cuando el contribuyente efectúe operaciones que por sus características resulten complejas tales, como las realizadas por Bancos y Entidades Financieras se establecerá una base propia que estará constituida por la diferencia que resulte entre el total de la suma de haber de la cuenta de resultados y los intereses y actualizaciones pasivas ajustada en función de su exigibilidad en el período fiscal de que se trate...". La normativa habilitaba la deducción de los intereses y actualizaciones pasivas sobre los ingresos y, por ende, determinaba que la base imponible de la TSH estuviera constituida por el spread bancario en pleno acatamiento del funcionamiento de la actividad de intermediación financiera de los bancos. Sin perjuicio de lo anterior, a través de la Ordenanza Fiscal 2024 la Municipalidad modificó la redacción del artículo 183 en lo que refiere a la conformación de la base imponible de la TSH para las entidades financieras, determinando que "...Para las entidades financieras comprendidas o no en la Ley 21.526 y sus modificaciones, y las sociedades de crédito para consumo, se considera ingreso bruto a los importes devengados en función del tiempo en cada período. La base imponible está constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de resultado, no admitiéndose deducciones de ningún tipo..."

Afirman que la regulación del funcionamiento de la actividad bancaria se encuentra sometida exclusivamente a la reglamentación de la legislación federal emitida por el Congreso Nacional y fuera del alcance de las prerrogativas de las jurisdicciones locales. En otras palabras, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios no pueden





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

inmiscuirse en esa regulación de manera directa o indirecta. En ese contexto, se sancionó la Ley 21.526 que regula el funcionamiento de las entidades financieras que en su artículo 1 establece que “...Quedan comprendidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias las personas o entidades privadas o públicas oficiales o mixtas- de la Nación, de las provincias o municipalidades que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros...”

Manifiestan que, al tratarse de una actividad de intermediación, la retribución o verdadero ingreso está constituido necesariamente por la diferencia entre los ingresos financieros obtenidos y los egresos financieros en que se incurre para poder desarrollar la actividad y obtener dichos ingresos. Es decir, por el spread. Se trata precisamente de la retribución propia de cualquier actividad de intermediación (conf. artículos 1486 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación que regulan figuras contractuales de intermediación). Aquí es donde se observa la ilegitimidad del artículo 183 de la Ordenanza Fiscal 2024. Al impedir que se deduzcan los intereses y actualizaciones pasivas de los ingresos financieros a los fines de conformar la base imponible de la TSH y limitar la misma al total del haber de las cuentas de resultados, dicha normativa: desnaturaliza la actividad de los bancos y no le otorga el tratamiento de una intermediación financiera que la legislación federal expresamente le dispensa; pierde de vista las regulaciones sobre la conformación de la contabilidad de los bancos [ver punto C) del apartado 3.1 supra] y termina violentando el principio de capacidad contributiva en tanto pretende gravar con la TSH a resultados que no se corresponden con la retribución que reciben por el ejercicio de su actividad económica. Es decir, la legislación local impugnada violenta las previsiones de los artículos 1 y concordantes de la Ley 21.526 en tanto se pierde de vista que la normativa federal otorga a la actividad bancaria el carácter de una actividad de intermediación y, por ende, determina que los resultados de los bancos necesariamente deben estar 21 constituidos por el spread bancario y nunca podría estar conformados exclusivamente por los ingresos financieros.

Refiere que, en el caso del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U: tributaría el sideral importe de \$550.628.195,24 en concepto de la TSH cuantificando la base imponible sobre la base spread y debería tributar \$1.774.269.740,14 si se aplica la ilegítima normativa impugnada y cuantificando la base imponible sin habilitar deducciones. Es decir, la aplicación de la normativa cuestionada triplica el valor de la TSH en un mismo año respecto



de un monto que ya resulta sumamente elevado y genera la tributación de sumas dinerarias que no guardan relación con la realidad económica, fiscal y operacional. Luego, describe similares situaciones en los demás Bancos que son actores en este litigio.

Finalmente, ofrece prueba, funda en derecho, cita jurisprudencia y solicita el dictado de una medida cautelar ordene a la demandada y/o a cualquiera de sus organismos que: (i) suspendan la aplicación de la normativa cuestionada y/o de toda aquella que se emita en el futuro en lo que se refiere a la pretensión de que la base imponible de la TSH esté constituida por el total de la suma del haber de la cuenta de resultados sin que se admita deducciones; (ii) se abstengan de iniciar cualquier trámite o acción administrativa y/o judicial tendiente a exigir a nuestras representadas el pago de la TSH cuantificando la base imponible de esa manera; (iii) se abstengan de cursar reclamos y/o instruir sumarios y/o tomar cualquier medida y/o de solicitar y trabar medidas cautelares contra nuestras mandantes y (iv) habiliten el pago de la TSH mediante la conformación de la base imponible con los ingresos de los bancos y la deducción de los intereses y actualizaciones pasivas. Todo ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones.

II) Adentrándome en el tratamiento de la medida cautelar solicitada por los actores, corresponde advertir que, como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no exceda el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad. El deslinde entre tales perspectivas de estudio debe ser celosamente guardado pues de él depende la supervivencia misma de las vías de cautela. Ello, por su lado, requiere de los jueces un ejercicio puntual de la virtud de la prudencia, a efectos de evitar la fractura de los límites que separan una investigación de otra (Fallos: 306:2060).

La naturaleza de la cautelar bajo análisis, atento tratarse de una “medida cautelar innovativa”, impone puntualizar que la misma importa una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, y que, por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (conf. Fallos: 316:1833).





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

Asimismo, la índole de la medida peticionada hace menester recordar que, si bien por vía de principio las medidas como la requerida no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695; 322:2272; E. 46 XXXIII “Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, sentencia del 22 de mayo de 1997; A. 612-XXXV “Álvarez, Raúl José c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa”, sentencia del 14 de octubre de 1999).

A su vez, en relación a la índole del objeto de autos, ha de señalarse que la situación coincide con lo resuelto por el cimero Tribunal de Justicia en “Fallos” 313:1420, en cuanto a que “...Es importante afirmar que el régimen de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez. Uno de los peores males que el país soporta -como es notorio y ha sido enérgicamente denunciado por los órganos políticos del Estado- es el gravísimo perjuicio social causado por la ilegítima afectación del régimen de los ingresos públicos, que proviene de la evasión o bien de la extensa demora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En la medida en que su competencia lo autorice, los jueces tienen el deber de contribuir a la eliminación o en todo caso a la aminoración de esos dañosos factores y comprender que son ‘disvaliosas’...” (‘Fallos’ 302:1284, CSJN).

Así las cosas, resulta oportuno recordar que las imposiciones de Tasas Municipales, como tantas otras, forman como un tributo que encuadrado dentro de los principios constitucionales tributarios (A saber, arts 1, 16, 17, 19 y 33 de la Constitución Nacional) y que, por otro lado, se encuentran sometidas a la distribución de competencias propia de nuestra forma de Estado Federal (Conf. arts. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 75 incisos 2, 3, 13, 18 y 30, 121, 123, 124 y 129 de nuestra Carta Magna).

Cabe señalar, que, en el particular caso de autos, los actores no discuten que la Municipalidad de Avellaneda cuenta con las facultades suficientes para obligar al pago de la TSH respecto de los locales instalados dentro del ámbito territorial de dicho Municipio, dado que dichas Tasas corresponden al ámbito de facultades que le son propias a los municipios (Fallos 322:2331).



En esa inteligencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha calificado a la Tasa como "...una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal, concreta y efectiva, que atañe al contribuyente..." (Fallos: 332:1503, 344:2123, entre otros). La CSJN argumentó que "el reconocimiento de la autonomía municipal importa, necesariamente, garantizar los medios para la subsistencia de los municipios. Dentro de ese derecho a los medios, se encuentran los recursos provenientes de la potestad tributaria que titularizan y dentro de los mismos, las tasas constituyen un capítulo central para lograr el cumplimiento de los cometidos de dicha organización estatal. Precisó que la atribución de los municipios para crear una tasa, se encuentra sujeta a las siguientes pautas: a) la definición clara y precisa del hecho imponible y la individualización de los servicios o actividades que se ofrecen; b) la organización y puesta a disposición del servicio al contribuyente; y c) la adecuada y precisa cuantificación del tributo, debiendo para ello la autoridad fiscal ponderar prudencialmente, entre otros parámetros, el costo global del servicio o actividad concernido y la capacidad contributiva..." (Fallos 344:2123, in re "Esso Petrolera Argentina SRL y otro c/ Municipalidad de Quilmes s/ Acción contencioso administrativa").

En definitiva, la CSJN ha establecido que "...no existen reparos de índole constitucional para recurrir a los ingresos brutos del contribuyente como indicador de capacidad contributiva y factor para el cálculo de la base imponible de un tributo -tasa por inspección de seguridad e higiene- como el considerado en autos, pero en tanto ello no derive en resultados irrazonables, desproporcionados y disociados de las prestaciones directas e indirectas que afronta el municipio para organizar y poner a disposición el servicio..." (Voto de los jueces Maqueda y Rosatti, en Fallos 344:2123) -el subrayado es para destacar lo que aquí resulta de mayor relevancia-.

III) De la lectura de las Ordenanzas Fiscales para el año 2023 (Ordenanza nro. 29.911 del 24/11/2022) y para el año 2024 (Ordenanza nro. 30.476 del 30/11/2023 con la modificatoria de la Ordenanza nro.30.644 del 25/04/2024) se desprende que con anterioridad a la sanción de la legislación cuestionada, el artículo 183 de la Ordenanza Fiscal de la Municipalidad disponía respecto a la base imponible de la TSH relativa a los bancos lo siguiente: "...Cuando el contribuyente efectúe operaciones que por sus características resulten complejas tales, como las realizadas por Bancos y Entidades





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

Financieras se establecerá una base propia que estará constituida por la diferencia que resulte entre el total de la suma de haber de la cuenta de resultados y los intereses y actualizaciones pasivas ajustada en función de su exigibilidad en el período fiscal de que se trate...” . Luego, a través de la Ordenanza Fiscal 2024 la Municipalidad modificó la redacción del artículo 183 en lo que refiere a la conformación de la base imponible de la TSH para las entidades financieras, determinando que “...Para las entidades financieras comprendidas o no en la Ley 21.526 y sus modificaciones, y las sociedades de crédito para consumo, se considera ingreso bruto a los importes devengados en función del tiempo en cada período. La base imponible está constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de resultado, no admitiéndose deducciones de ningún tipo...”. La modificación se introdujo a través de la Ordenanza N° 30.476 y el artículo mantuvo su redacción en el texto de la Ordenanza Fiscal 2024 establecido por la Ordenanza N° 30.644.

En este contexto es que el aumento de la TSH refleja un aumento considerable de un período fiscal al otro teniendo en cuenta que el hecho imponible por la TSH es el mismo.

En esa línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido consistente en la interpretación de contribuciones como la aquí analizada. De acuerdo a sus precedentes, para que una contribución satisfaga el test de constitucionalidad deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio en particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y c) es el fisco municipal quien debe probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

En ese sentido ha dicho el cimero Tribunal de Justicia: “...La excesiva laxitud en la determinación de los servicios que las tasas pretenden retribuir al no discriminar debidamente los servicios cuya manutención solicita, contrarían el principio de legalidad tributaria, pues posibilitan la eventual recaudación de los fondos para una finalidad ajena a la que presuntamente le habría dado origen (...) Es por ese motivo que, ante normas que realizan la descripción del hecho imponible en términos excesivamente amplios se acrecienta la obligación de demostrar la efectiva prestación de un servicio concreto, efectivo e individualizado...” (conf. Fallos: 331:2406). Lo demuestra, por lo menos en esta preliminar etapa procesal; la ilegalidad de la contribución en cuestión, en tanto, dada la excesiva amplitud de su caracterización, no puede sostener que las entidades bancarias



accionantes, reciban algún servicio concreto por parte de la Municipalidad de Avellaneda que justifique su retribución. Esto es, he de reiterar, en principio pareciera alcanzar la categoría de "impuesto" y no de "Tasa municipal".

Así, "...Existe desproporción entre el importe de la tasa que el Municipio intenta percibir y el servicio hipotéticamente prestado, por cuanto la forma y base de medición se hallan totalmente desvinculadas del servicio que pretende retribuir. Por ello la tasa resulta irrazonable y desproporcionada en función que su cobro no responde a una concreta, efectiva e individualizada prestación de servicios..." (Fallos 234:663).

En cuanto a los porcentajes de los montos que el Municipio exige a las accionantes en concepto de Tasa, tachados de inconstitucionales y desproporcionados por esta última; es dable recordar que, en materia de derecho tributario, las Tasas, como una de las especies de tributos, se caracterizan por la presencia de una actividad prestacional estatal para cuyo sostenimiento se recauda las sumas tributadas, cuyo monto debe ser, por ende, acorde al costo del servicio brindado. Por eso, el legislador debe establecer un criterio para cuantificar esos tributos en relación con el servicio prestado y con su potencial aprovechamiento por el contribuyente, y no solo con la capacidad contributiva del sujeto pasivo. La CSJN ha señalado que "... es naturaleza de la tasa que su cobro corresponda siempre a la concreta, efectiva, e individualizada prestación de un servicio relativo al contribuyente. La diferencia más evidente entre el impuesto y la tasa es precisamente que esta última está vinculada con una actividad estatal que no existe en aquella y que la base de la medición debe estar relacionada con su hecho generador (la actividad vinculante) mientras que en los impuestos tal base de medición se conecta con situaciones relativas al sujeto pasivo, a sus bienes o actividad..." (fallo 234:663).

En esa vivacidad, no se advierte de las Ordenanzas Municipales que las sumas determinadas por el erario municipal guarden una razonable y prudente proporcionalidad con el servicio prestado y, por tanto, no se advierte, por el momento, razonable que la inspección esporádica de las condiciones de los locales de los Bancos actores, pueda generar semejante suma atendiendo a la relativa simplicidad de las comprobaciones sobre la base de las dimensiones, cantidad de personal y objeto específico de ellas.

Esto es, habría una desproporción entre la Tasa que la Municipalidad de Avellaneda intenta percibir y el servicio supuestamente prestado, ya que, por su propia naturaleza, los Bancos actores no requerirían usar los servicios contemplados, porque su actividad no





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

genera riesgo. Lo cual, y hasta tanto se pueda contar con todos los elementos probatorios de que ambas partes intenten valerse para la sustanciación de la oportuna sentencia de mérito, la Tasa en cuestión aparece como desproporcionada, irrazonable e ilegítima.

Entonces, como acertadamente lo advierte la parte actora, la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene devendría ilegítima, por cuanto no está vinculada con el servicio (supuestamente) retribuido, y los índices pretenden multiplicar el valor de la Tasa e incrementar la recaudación municipal.

Por las consideraciones aquí vertidas, considero, prima facie y sin perjuicio de lo que se resuelva al momento del dictado de la correspondiente sentencia definitiva, conforme la prueba a producirse en los presentes obrados, que la carga tributaria impuesta por la Municipalidad de Avellaneda a través de las Tasas dispuestas por el artículo 183 de la Ordenanza Fiscal para el ejercicio 2024, aparece verosíblemente desproporcionada en el caso, atento los altos montos que su aplicación conlleva y el servicio que se prestaría relacionado con la tasa en cuestión.

Asimismo, no puede soslayarse que dicha situación es demostrativa de la existencia del peligro en la demora, debido a la importancia que constituye para la población en general el adecuado funcionamiento de las Entidades Bancarias afectadas, la cual se ve seriamente afectado por la merma que representa el desproporcionado monto que le impone la Municipalidad demandada, por el pago de la Tasa aquí cuestionada.

IV) En consecuencia, razones de prudencia llevan a concluir que, ante la verosimilitud de los derechos en juego y el peligro que la demora en el dictado de la sentencia definitiva podría generar, habré de hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por la parte actora, sin contracautela en tanto el accionante se encuentra exento conforme lo preceptuado por el art. 200, inc. 1º, del C.P.C.C.N., disponiendo respecto de: Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Comafi S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Banco Piano S.A, hasta tanto se resuelva la presente la acción, la Municipalidad de Avellaneda y/o a cualquiera de sus organismos: a) suspendan la aplicación del artículo 183 de la Ordenanza Fiscal para el ejercicio 2024 (Ordenanza nro. 30.476 del 30/11/2023 con la modificatoria de la Ordenanza nro.30.644 del 25/04/2024) y/o de toda aquella que se emita en el futuro en lo que se refiere a la pretensión de que la base imponible de la TSH esté constituida por el total de la suma del haber de la cuenta de



resultados sin que se admita deducciones; b) se abstengan de iniciar cualquier trámite o acción administrativa y/o judicial tendiente a exigir a nuestras representadas el pago de la TSH cuantificando la base imponible de esa manera; c) se abstengan de cursar reclamos y/o instruir sumarios y/o tomar cualquier medida y/o de solicitar y trabar medidas cautelares y d) habiliten el pago de la TSH mediante la conformación de la base imponible con los ingresos de los bancos y la deducción de los intereses y actualizaciones pasivas (conforme Ordenanza Fiscal para el año 2023 - Ordenanza nro. 29.911 del 24/11/2022), sin que ello en modo alguno signifique adelanto de opinión sobre el fondo del asunto, siendo el resultado de un análisis superficial propio del estadio cautelar.

Por los fundamentos expuestos,

RESUELVO:

1) Tener por presentados a Andres Valls, Claudio Cesario, Hugo Bruzone, Diego García, Carmen Nosetti, Josue Antu Aguilar, Guillermo Pedró, Leonel Manevy, Carlos María Rotman y Carlos Alberto Carmen en representación de la Asociación de Bancos Argentinos, Asociación de Bancos de la Argentina, Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Comafi S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Banco Piano S.A., respectivamente, por parte, con el patrocinio letrado de los Dres. Liban Angel Kusa (T° 102 F° 761, C.F.A.S.M.) y Nicolás Nogueira Castellini (T° 136 F° 494, C.F.A.S.M.), por denunciados los domicilios reales y por constituidos los domicilios legal y electrónicos indicados.

2) Hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por la parte actora, ordenando que respecto de: Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Comafi S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Banco Piano S.A. en el plazo de tres (3) días y hasta tanto se resuelva la presente la acción, la Municipalidad de Avellaneda y/o a cualquiera de sus organismos: a) suspendan la aplicación del artículo 183 de la Ordenanza Fiscal para el ejercicio 2024 (Ordenanza nro. 30.476 del 30/11/2023 con la modificatoria de la Ordenanza nro.30.644 del 25/04/2024) y/o de toda aquella que se emita en el futuro en lo que se refiere a la pretensión de que la base imponible de la TSH esté constituida por el total de la suma del haber de la cuenta de resultados sin que se admita deducciones; b) se abstengan de iniciar cualquier trámite o acción administrativa y/o judicial tendiente a exigir





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

a nuestras representadas el pago de la TSH cuantificando la base imponible de esa manera; c) se abstengan de cursar reclamos y/o instruir sumarios y/o tomar cualquier medida y/o de solicitar y trabar medidas cautelares y d) habiliten el pago de la TSH mediante la conformación de la base imponible con los ingresos de los bancos y la deducción de los intereses y actualizaciones pasivas, (conforme Ordenanza Fiscal para el año 2023 - Ordenanza nro. 29.911 del 24/11/2022), sin que ello en modo alguno signifique adelanto de opinión sobre el fondo del asunto, siendo el resultado de un análisis superficial propio del estadio cautelar.

A los fines de hacer efectivo lo aquí dispuesto, en consonancia con las disposiciones de la CSJN Ac. 3 a 18/20, deberá la letrada conforme lo dispuesto en el Art. 400 del CPCCN, confeccionar, firmar y diligenciar el oficio pertinente con copia de la presente resolución (extraída del SJG) y de la documental correspondiente. Haciendo constar en el instrumento que la manda deberá efectivizarse, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones conminatorias pertinentes.

3) De conformidad con la pretensión deducida por la parte actora en el libelo en despacho, se declara que corresponde otorgar a estas actuaciones el trámite del juicio ordinario (artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En consecuencia, de la demanda y de la documentación adjuntada, córrase traslado a la demandada -Municipalidad de Avellaneda- para que comparezca y la conteste dentro del plazo de quince (15) días (artículos 338, 355, 356 y concordantes del Código de rito) bajo apercibimiento previsto en el art. 59 del mismo Código. Notifíquese, procediendo de igual manera a lo dispuesto en el punto 2) de la parte resolutive, último párrafo, de la presente.

4) Diferir el pronunciamiento sobre la aplicación de costas para el momento de Sentenciar.

REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

